JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C. quince (15) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Expediente: 2009- 00721.

Se decide el recurso de reposición y en subsidio apelación formulado por el extremo demandado contra el auto calendarado el 20 de febrero de 2020, mediante el cual se requirió a la parte demandante para que allegara la actualización del avalúo de conformidad con el artículo 444 del Código General del Proceso (fl.461).

ANTECEDENTES

Cimenta la opugnante su inconformidad en que el presente asunto inició en vigencia del Código de Procedimiento Civil, lo que implica que la norma aplicable es el artículo 516 de dicho estatuto y no el 444 del Código General del Proceso; además, agrega que dichas normas no contemplan la figura de su actualización, razón por la cual se deben tener en cuenta las experticias ya incorporadas al proceso, más aún si de acuerdo con el numeral 7º del artículo 471 del anterior compendio normativo, la base para hacer postura es el 100% del justiprecio dejado en firme dentro del proceso divisorio.

Por su parte, el extremo actor guardó silencio dentro del traslado otorgado conforme al artículo 110 del C.G.P.

CONSIDERACIONES

1. Los problemas jurídicos que surjen para dirimir, se centran en determinar la norma aplicable en el caso en particular, y si es o no procedente, solicitar la actualización del avalúo.

2. Delanteramente, es preciso señalar que resulta necesario aplicar a este proceso las reglas de transición contenidas en el artículo 625 del Código General del Proceso, en cuyo numeral 5º se dispone “(...) *los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones*”; y en lo demás, se aplica el artículo 13 *ibidem*, según el cual, las leyes de procedimiento son de orden público y por tanto de aplicación inmediata.

Sin desconocer, además, que acorde con lo dispuesto por el artículo 627 *idem*, este estatuto entraría a regir de manera gradual desde el 1º de enero de 2014, según lo determinara la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, quien informó que a partir del 1º de enero del 2016 empezaba a regir el Código General del Proceso¹.

Revisando la actuación surtida en el caso que nos ocupa, se atisba que este proceso se inició el 21 de enero de 2010, y para el 1º de enero de 2016, ya se había cerrado la etapa de práctica de pruebas y decretado la división

¹ Acuerdo PSAA15-10392 de 1º octubre de 2015 expedido por dicha Corporación.

ad valorem del inmueble identificado con folio N°50C-327281, encontrándose pendiente para dicha fecha la diligencia de secuestro del evocado bien, por lo que, se puede inferir que hasta esa fecha le fueron aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil, el cual incluía la práctica de la prueba pericial para establecer si el bien raíz era susceptible o no de ser dividido materialmente, junto con la objeción que frente al mismo presentó la demandada.

Ahora bien, la norma aplicable a la fecha en que se profirió el auto objeto de censura, esto es el adiado el 20 de febrero de 2020, mediante el cual se requirió a la parte demandante para que allegara la actualización del avalúo, se enmarca en el Código General del Proceso y no la prevista en el anterior estatuto procesal, acorde con el tránsito de legislación analizada previamente.

3. De otro lado, en lo que concierne a que la orden emitida en dicho proveído, para que se actualice el avalúo no tiene un sustento normativo, adviértase que el artículo 228 de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que se traduce en que las normas procesales constituyen el medio o el vínculo que permite concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos; y concordante con ello, el artículo 11 del C.G.P. que prescribe “*al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (...)*”, para indicar que la finalidad del derecho procesal y de contera, de los procesos en particular, es la realización de los derechos que en abstracto son titulares las personas naturales y jurídicas, y que corresponde al juez tutelar de manera efectiva en aquellos casos que encuentre en conflicto, en términos de igualdad y equilibrio para las partes involucradas en el mismo.

En este sentido, en lo que concierne con la actualización de los precios de los bienes, en procesos ejecutivos y en aquellos que impliquen el remate de bienes, la jurisprudencia constitucional ha sido prolífera en considerar que se incurre en exceso ritual manifiesto cuando a ello no se accede con el argumento que las normas procesales no brindan esa posibilidad en asuntos específicos, habiéndose autorizado el mismo en un proceso divisorio como el que aquí nos ocupa².

Nótese que el dictamen pericial fue presentado en febrero de 2012 y surtido su traslado el 21 de febrero de 2012, habiéndose formulado objeción por “error grave”, la cual fue despachada desfavorablemente en auto de 4 de julio de 2013, por lo que claramente se advierte que desde esa época hasta la actual han transcurrido 9 años y 6 meses aproximadamente, lapso durante el cual el valor del inmueble ha variado.

Téngase en cuenta que la distribución material del bien entre los comuneros debe realizarse tomando en consideración el precio que cada sector tiene conforme a la división de hecho efectuada por los condueños, por lo que resulta necesario actualizar el valor del mismo, además de que el dictamen debe ajustarse a las nuevas exigencias contenidas en el inciso 3º del artículo 406 del Código General del Proceso.

² Corte Constitucional, Sentencia T016 de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

4. En ese orden de ideas, no se revocará la decisión adoptada, teniendo en cuenta que contrario a lo aducido por la opugnante, las normas aplicables al caso son las contenidas en el Código General del Proceso y, además, teniendo en cuenta que conforme a lo expuesto resulta pertinente y necesario ordenar la actualización del justiprecio, atendiendo la efectivización de los derechos sustanciales de los sujetos procesales aquí intervinientes.

Por lo discurrido, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: MANTENER incólume el auto objeto de censura.

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión por estado electrónico según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura cuyo enlace es <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-16-civil-del-circuito-de-bogota>

NOTIFÍQUESE,

Firmado electrónicamente
CLAUDIA MILDRED PINTO MARTÍNEZ
JUEZ
(3)

<p>JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO SECRETARIA</p> <p>La providencia anterior se notifica por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No.0119 Fijado el 19 DE OCTUBRE DE 2021 a la hora de las 8:00 A.M.</p> <p>Luis German Arenas Escobar Secretario</p>

DQ

Firmado Por:

Claudia Mildred Pinto Martinez
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 016
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Código de verificación: **27192215ac7a0c90459edd709639030aa3f5199c9d94bc1e9035db3286bc8226**

Documento generado en 15/10/2021 02:51:30 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>